



La campaña de los fondos buitres

El empresario Paul Singer, un fuerte donante del Partido Republicano que litiga contra Argentina por cientos de millones de dólares, impulsa una campaña para presentar a este país como aliado de Irán, mientras una red de centros de estudios, políticos y expertos vinculados financieramente con él se encargan de amplificarla.



Roberto Bissio*

“El bienestar de los nativos”

En 1930, cuando el reparto colonial del mundo había terminado, las potencias colonizadoras buscaron justificar su papel autoimponiéndose una responsabilidad por “el bienestar de los nativos”. Así, por ejemplo, el Reino Unido aprobó en 1939 una Ley de Bienestar y Desarrollo Colonial en la que se establecen estándares mínimos de nutrición, educación y salud en los territorios y fideicomisos de la Corona. Esta propuesta, comenta H.W. Arndt en su libro *El Desarrollo Económico: Historia de una Idea*, publicado en 1987 por la Universidad de Chicago, era “muy distinta de la idea de progreso económico o desarrollo”.

El economista filipino Manuel “Butch” Montes recuerda estos antecedentes en un trabajo reciente para el Centro del Sur, el *think tank* de los países en desarrollo con sede en

Ginebra, y concluye que “el discurso sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) parece haber expulsado la idea básica de que desarrollo es transformación económica”.

“Mientras que el desarrollo puede proveer los medios para reducir la pobreza”, explica Montes, “las políticas de reducción de la pobreza no siempre conducen a que la gente avance de empleos menos productivos a otros más productivos”. Hay que “descolonizar los ODM”, concluye, si los nuevos objetivos que los sustituirán a partir de 2015 deben ser genuinamente de desarrollo.

Esta misma idea fue defendida en Nueva York por Luke Daunivalu, representante de Fiji, en ejercicio de la presidencia rotativa del Grupo de los 77 y China, la coalición que representa ante las Naciones Unidas a los países en desarrollo: “Una arquitectura económica y financiera justa y favorable, así como una verdadera alianza global para el desarrollo sustentable son cruciales para complementar los esfuerzos de los gobiernos nacionales”. Nuevas reglas de comercio e inversión y reforma de las instituciones financieras internacionales son esenciales, dijo, para hacer posible que los países en desarrollo efectivamente erradiquen la pobreza.

Según Yilmaz Ayküz, economista jefe del Centro del Sur, “los ODM no fueron una nueva agenda de desarrollo ni resultaron de negociaciones intergubernamentales que integraran las dimensiones nacionales e internacionales”, sino que “están basados en la visión de los países donantes y se enfocan en la ayuda y en la pobreza”, dejando afuera gran parte de la población de los países en desarrollo, en particular de los de ingreso medio, “que superan los niveles mínimos establecidos por los ODM pero no ven cumplidas sus aspiraciones”.

Si queremos un cambio, argumenta Ayküz, “en vez de enfocarnos sobre objetivos específicos en las áreas del desarrollo económico y social o la protección ambiental, debemos crear un ambiente internacional propicio que permita a cada país perseguir sus

El discurso sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio parece haber expulsado la idea básica de que desarrollo es transformación económica.

propios objetivos según sus propias prioridades y con políticas propias”.

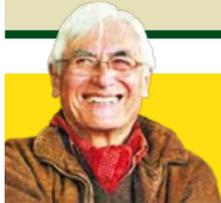
Ayküz observa que el progreso en el desarrollo humano y social en los países del Sur depende de la ayuda externa y de la redistribución del gasto público. Estas transferencias están necesariamente limitadas sin un ritmo adecuado de generación de empleos y de ingresos. Y como el crecimiento en las economías dependientes de materias primas o de servicios está limitado, la industrialización es la única manera de reducir las brechas de ingresos, productividad, tecnología y habilidades que nos separan de las economías más avanzadas.

La industrialización es posible incluso en economías pequeñas como Taiwán, Suiza o Singapur. Por otro lado, países ricos en recursos naturales, como Suecia y Estados Unidos, recién pudieron cerrar la brecha que los separaba de las economías avanzadas en su momento cuando comenzaron a industrializarse. Sin embargo, el espacio político para los países en desarrollo hoy es mucho menor que el que estos países tuvieron, debido a la tendencia de quienes han llegado a la cima a “patear la escalera” e impedir a quienes vienen detrás que practiquen las mismas políticas que les permitieron subir.

Además, los países en desarrollo carecen del “espacio ambiental” que tuvieron las economías hoy avanzadas cuando comenzaron a industrializarse. Siglos de desarrollo industrial han colmado la capacidad de absorción de carbón de la atmósfera y el escaso “espacio-carbón” disponible sigue siendo usado en gran medida por las economías avanzadas con altísimo nivel de emisiones per cápita de dióxido de carbono y otros gases dañinos.

Es imperioso resolver, a nivel internacional, un mecanismo de compensación por los costos infligidos a los países en desarrollo mediante la degradación ambiental resultante de años de industrialización en las economías avanzadas, argumenta Ayküz. Al mismo tiempo, el “ambiente económico” debe ser favorable al desarrollo y eso quiere decir que se acuerden mecanismos para prevenir la inestabilidad financiera internacional y terminar con políticas que lo obstaculizan, tales como los subsidios agrícolas, las restricciones al movimiento de los trabajadores, la propiedad intelectual abusiva o las políticas monetarias y cambiarias que “exportan la crisis” de las economías avanzadas a los países menos favorecidos.

* Director del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).



Imperio en apuros

Héctor Béjar
www.hectorbejar.com

No es un hecho menor que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América haya ordenado cerrar por una semana las embajadas, consulados y legaciones diplomáticas en Yemen, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y otros diecinueve países del Medio Oriente y el norte de África, y pida a sus ciudadanos abandonar de inmediato Yemen.

Tienen que irse de Lahore, en Pakistán, porque sus aviones bombardearon un funeral el *Id al-Fitr*, día sagrado del calendario musulmán que marca el final del Ramadán, matando a cuarenta y cuatro inocentes. En la provincia afgana de Nangarhar mataron a catorce mujeres y niños que asistían a una fiesta familiar. En respuesta, los talibanes hicieron volar a treinta asistentes al funeral de un oficial de la policía en Quetta, una ciudad pakistani.

El cierre de la embajada norteamericana en Yemen es indefinido. Yemen es uno de los más antiguos centros de la civilización. Fue en tiempos bíblicos el mítico país de la Reina de Saba. Está situado al sur de Arabia Saudita. A la caída del Imperio Otomano en 1918, el norte de Yemen consiguió su independencia y fue gobernado por la familia feudal Hamidaddin hasta 1962 en que oficiales nacionalistas republicanos apoyados por Egipto, luego de tomar el poder, organizaron la República Popular Democrática de Yemen, mientras Yemen del sur mantenía el régimen tradicional.

En 1978, ambos estados se unificaron, pero no sus ejércitos, y se produjo una nueva guerra civil en 1986. En 1990 volvieron a unificarse bajo la presidencia de Ali Abdallah Saleh. Yemen unificado se opuso a la intervención norteamericana en Irak ocasionando la ira de Arabia Saudita y los Estados Unidos. Pero cuando se produjo el atentado contra las torres de Nueva York el gobierno declaró su solidaridad con los norteamericanos. Los disidentes clericales shiitas se rebelaron en 2004. En ese ambiente, Saleh ganó las elecciones de 2006. En 2007, las ramas yemenita y saudí de Al Qaeda empezaron ataques terroristas con coches bomba. El ejército obligó al desplazamiento de miles de personas. Tres mil soldados perecieron en 2010 en una nueva guerra. Barack Obama autorizó el uso de drones contra los campos

Obama autorizó el uso de drones contra los campos de Al Qaeda en Sana y Abyan, en ataques erróneos contra Ibrahim Al Asiri, señalado como fabricante de las bombas de alto poder.

de Al Qaeda en Sana y Abyan, en ataques erróneos contra Ibrahim Al Asiri, señalado como fabricante de las bombas de alto poder usadas por el terrorismo. En la provincia de Lahj, los drones han matado a treinta y ocho sospechosos. En el área de Askarija, según informa el *New York Times*, han causado nueve muertes en dos semanas.

En su edición del 10 de agosto, el diario alemán *Suddeutsche Zeitung* ha revelado que Gerhard Schlinder, jefe de la BND, el servicio secreto alemán, dio la orden de entregar a la CIA números de teléfonos móviles de sospechosos de terrorismo para que sean ejecutados por drones. Alemania se ha convertido en colaboradora de los asesinos de gente que es solo sospechosa.

Mientras tanto, los jhaddistas tienen ya combatiendo en Siria, según informa el *New York Times*, seis mil guerrilleros urbanos del Frente Nursa de Irak, veteranos de acciones contra la ocupación norteamericana, unidos a combatientes chechenos, egipcios y pakistaníes, un ejército suicida internacional.

Mientras en Yemen los norteamericanos no saben qué hacer, la intervención de la CIA en Siria ha resultado letal para los Estados Unidos. El odio al Imperio cunde desde el Medio Oriente hasta el norte de África, donde surgen sin cesar nuevas generaciones de Al Qaeda. Promociones recientes de cientos de grupos suicidas son incontrolables e imprevisibles, porque no tienen un mando único que pueda ser manipulado como antes.

Los norteamericanos no lograron derribar al régimen sirio y, en vez de ello, han ocasionado una alianza de hecho entre Irán, Hezbollah y Al Qaeda, cuyo resultado ha sido una secuencia de derrotas de los mercenarios que financian. Entre los mil doscientos grupos en que está dividida la oposición siria, según el *New York Times*, el jhaddismo también ha empezado a crecer.

La campaña de los fondos buitres

Argentina y el “diablo” iraní

El empresario estadounidense Paul Singer, un fuerte donante del Partido Republicano que litiga contra Argentina por cientos de millones de dólares, impulsa una campaña para presentar al país sudamericano como aliado de Irán, mientras una red de centros de estudios, políticos y expertos vinculados financieramente con él se encargan de amplificarla.

Charles Davis

Cuando Argentina entró en *default* (suspensión de pagos) en 2001, varios fondos especulativos estadounidenses se abalanzaron a comprar los deprimidos bonos por unos centavos, confiados en que a la postre venderían en los estrados de su país y la obligarían a pagar hasta el último dólar del precio nominal. La batalla por esa deuda llegaría a la Corte Suprema de Estados Unidos este año, pero los acreedores de Wall Street también llevaron el caso al Congreso y a la opinión pública. Este esfuerzo de relaciones públicas se desarrolla mientras el gobierno de Barack Obama evalúa si apoyar a Argentina en la Corte Suprema.

En presentaciones judiciales previas, la administración Obama había argumentado que la deuda argentina no era competencia de la justicia estadounidense, reflejando así la preocupación de que una victoria de los tenedores de bonos causara otro *default* y complicara futuras reestructuras de deudas de otras naciones. Sin embargo, los tenedores de títulos argentinos ya lograron varias victorias. En octubre de 2012, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos falló que Argentina debía pagar más de 1,300 millones de dólares a sus acreedores y el 24 de julio, el FMI anunció que no apoyaría formalmente a Buenos Aires en la querrela, argumentando que la administración Obama se oponía a ello.

El hecho de que la Casa Blanca esté dando marcha atrás en su defensa de Argentina indica que los millones de dólares invertidos por los fondos de inversión para presionar al gobierno, el Congreso y la prensa están comenzando a cambiar el debate, en el que Irán adquiere un protagonismo similar al de Irak en 2002. “Hacemos todo lo que podemos para que

nuestro gobierno y los medios noten que mal actor es Argentina”, dijo Robert Raben, fiscal general asistente durante el gobierno de Bill Clinton y director ejecutivo de la American Task Force Argentina (ATFA), a *The Huffington Post*.

La ATFA, fundada por tenedores de bonos argentinos, ha destinado al menos 3,8 millones de dólares a difundir una imagen negativa de Argentina. Pero ese monto es infimo en comparación con lo que sus fundadores esperan ganar.

En 2008, el fondo de inversiones NML Capital pagó cuarenta y ocho millones de dólares por bonos argentinos que, antes del cese de pagos, valían más de trescientos millones. La compañía matriz de NML Capital es Elliott Management, que encabeza la batalla legal contra Argentina bajo la conducción del empresario Paul Singer.

Luego de la cesación de pagos de Argentina, más de noventa y dos por ciento de los tenedores de bonos aceptaron un acuerdo negociado. Pero NML insiste en que pague los 370 millones de dólares nominales, lo que le daría un retorno de más de setecientos setenta por ciento de la inversión inicial.

AZUZANDO AL “DIABLO” IRANÍ

Singer es uno de los cuatrocientos hombres más ricos del mundo. Según *Forbes*, posee un activo neto de 1,300 millones de dólares, lo que le ha permitido convertirse en uno de los principales contribuyentes del Partido Republicano. En 2012, aportó más de un millón de dólares a la fracasada candidatura presidencial de Mitt Romney y empleados de su firma contribuyeron con más de tres millones de dólares a varios postulantes. Todos los candidatos que apoyó son decididamente de derecha.

En 2007, Singer se describió a sí mismo como un creyente del excepcionalismo estadounidense y reveló haber aportado



“millones de dólares a organizaciones republicanas que insisten en un ejército poderoso y en el apoyo a Israel”. En entrevista con *The New York Times*, dijo creer que Occidente “se encuentra en una etapa temprana de una prolongada lucha existencial con grupos radicales de islamistas pannaacionales”.

En el tema de las relaciones de Argentina con Irán, Singer logró alinear perfectamente sus intereses financieros y su miedo al islamismo radical. En su batalla legal contra la nación sudamericana tiene cientos de millones de dólares en juego. La expectativa de un jugoso día de pago lo llevó a invertir una pequeña fortuna en una campaña dedicada a retratar a Argentina como estrecha aliada de Irán. Sus métodos incluyen la publicación de comunicados a cargo de la ATFA, la publicidad de página entera en los principales diarios y el aporte a políticos estadounidenses para determinar la suerte del debate público e influenciar decisiones.

El informe Nisman sobre la AMIA

El fiscal argentino Alberto Nisman basó el arresto que emitió en 2006 contra siete altos funcionarios iraníes por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, que dejó ochenta y cinco muertos y más de trescientos heridos, en los testimonios de representantes del Mujahedin E Khalq (MEK), que cometió atentados terroristas contra objetivos civiles en Irán y sirvió como ejército mercenario en Irak para Saddam Hussein durante la guerra entre ambos países (1980-1988). El testimonio principal es el de Reza Zakeri Kouchaksaraee, presidente del Comité de Seguridad e Inteligencia del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI), brazo político del MEK, ante

agenda global

a un encuentro similar. Estos dos magistrados están entre quienes deberán resolver si la Corte Suprema de Estados Unidos tiene competencia para dirimir el litigio entre los bonistas y Argentina.

Una carta enviada el 10 de julio por doce congresistas al fiscal general Eric Holder reclama al Departamento de Justicia que no se ponga a favor de Argentina en el proceso judicial. Presenta como argumentos el acuerdo por el caso AMIA y el comercio en ascenso entre Irán y Argentina, “mientras el resto del mundo [Estados Unidos incluido] intenta aislar y presionar a Irán para que abandone su programa nuclear. Recompensar la decisión argentina de incumplir sólidos principios internacionales para una reestructuración ordenada de su deuda soberana envalentonó obviamente a sus dirigentes como para que desafíen con impunidad otras normas internacionales”.

Los firmantes recibieron en 2012 más de 200,000 dólares de empresas y comités de acción política ligados a Singer. Uno de ellos, el representante republicano por Nueva York Michael Grimm, fue reelegido tras recibir 38,000 dólares de Elliott Management, casi el doble que su segundo mayor contribuyente. Otra firmante, la republicana por Florida Ileana Ros-Lehtinen, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, recibió 108,000 dólares del comité Unidad Estadounidense, fundado mediante una inversión de un millón de dólares del propio Singer. Otro, el republicano por Nueva Jersey Scott Garrett, que preside el Subcomité de Asuntos Financieros sobre Mercados de Capitales de la Cámara de Representantes, recibió 35,000 dólares de Elliott Management.

Roger Noriega, exfuncionario del gobierno de George W. Bush, firmó en marzo un artículo reclamando a Washington que responsabilizara a Argentina por no cumplir “sus obligaciones con instituciones financieras internacionales” y por “sus complicadas alianzas con gobiernos re-negados”. El influyente grupo neoconservador American Enterprise Institute [AEI] publicó el artículo.

Noriega recibió en 2007 al menos 60,000 dólares de Elliott Management para hacer *lobby* sobre “la deuda soberana que se debe a una compañía estadounidense”. Un documento impositivo al que tuvo acceso *The Nation* muestra que el AEI recibió 1,1 millones de dólares de Singer en 2009. Ante la consulta de IPS, una fuente del AEI dijo que la organización “había examinado el asunto” y concluido que Noriega “no tiene un conflicto de intereses en este caso”.

No importa cómo resulte el litigio contra Argentina, Paul Singer seguirá siendo un hombre muy rico y poderoso. Si gana, será más rico aún. Y el dinero en Estados Unidos entraña el poder de influir en cualquier debate, no solo sobre cuestiones financieras, sino también sobre la guerra y la paz.

demócratas, entre ellos Duncan y Grimm, en la que se advierte que “Argentina puede estar intentando apoyar el programa ilícito de armas nucleares iraní”, le pide que sopesé los vínculos del gobierno de Fernández con “el principal auspiciante mundial del terrorismo” y considere si el Departamento de Estado debe o no ponerse del lado argentino en el litigio con los fondos de alto riesgo.

Farah publicó una columna en *The Miami Herald* el 26 de junio subrayando la “cada vez más estrecha relación [de Argentina] con los ayatolá”. Citó un informe de 2012 del fiscal Nisman, en el que afirmaba que Teherán estaba usando a su país con el fin último de “exportar la revolución iraní”.

“¿Por qué Argentina permite que Irán examine el ataque a la AMIA, un crimen que seguramente cometió Hezbolá?”, cuestionó Lee Smith, editor de *The Weekly Standard* y miembro de la Foundation for Defence of Democracies (FDD), un centro de pensamiento neoconservador cuyos analistas ya publicaron este año media docena de críticas a Argentina. Según declaraciones de impuestos a las que accedió IPS, Singer ha aportado al menos 3,6 millones de dólares a la FDD desde 2008. El director de *The Weekly Standard*, William Kristol, es miembro de los consejos de la FDD y del Manhattan Institute.

Roger Noriega, exfuncionario del gobierno de George W. Bush, firmó en marzo un artículo reclamando a Washington que responsabilizara a Argentina por no cumplir “sus obligaciones con instituciones financieras internacionales” y por “sus complicadas alianzas con gobiernos re-negados”. El influyente grupo neoconservador American Enterprise Institute [AEI] publicó el artículo.

Noriega recibió en 2007 al menos 60,000 dólares de Elliott Management para hacer *lobby* sobre “la deuda soberana que se debe a una compañía estadounidense”. Un documento impositivo al que tuvo acceso *The Nation* muestra que el AEI recibió 1,1 millones de dólares de Singer en 2009. Ante la consulta de IPS, una fuente del AEI dijo que la organización “había examinado el asunto” y concluido que Noriega “no tiene un conflicto de intereses en este caso”.

No importa cómo resulte el litigio contra Argentina, Paul Singer seguirá siendo un hombre muy rico y poderoso. Si gana, será más rico aún. Y el dinero en Estados Unidos entraña el poder de influir en cualquier debate, no solo sobre cuestiones financieras, sino también sobre la guerra y la paz.



South-North Development Monitor

● **Salud: las verdades a medias de Roche sobre nulidad de solicitudes de patentes.** El gigante farmacéutico Roche ha revelado verdades a medias con respecto a la anulación de tres de las solicitudes de patentes de la empresa farmacéutica en la lucha contra el cáncer de mama, el medicamento Trastuzumab, comercializado bajo la marca Herceptine.

En respuesta, el gobierno indio emitió un comunicado de prensa el 5 de agosto para proporcionar una visión completa de la situación. La Oficina de Patentes de India, con sede en Calcuta, levantó las solicitudes de patentes de Trastuzumab el 17 de julio.

Roche comercializa Trastuzumab y disfruta de un monopolio en el mercado mundial debido a la protección de patentes. La patente original expira en 2014, sin embargo, la empresa farmacéutica ha obtenido varias patentes sobre diversas formulaciones de ese medicamento y sus combinaciones con el fin de extender su monopolio. [12/8/2013]

● **Derechos femeninos, eje de reunión sobre población en Montevideo.** La Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe evaluó del 12 al 15 de agosto en Montevideo los éxitos y fracasos de una amplia gama de temas de género, como salud reproductiva, violencia sexual, derechos femeninos, mortalidad materna y el avance del VIH/sida.

La pregunta que se hicieron la mayoría de los delegados es cómo se ha desempeñado la región en la implementación del histórico Programa de Acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo realizada en 1994 en El Cairo. La cuestión parece aún más relevante considerando que el año próximo está prevista una reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para evaluar los logros y las deficiencias de dicha conferencia. [13/8/2013]

SUNS es una fuente única de información y análisis sobre temas de desarrollo internacional, con especial énfasis en las negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. El servicio en inglés está disponible para suscriptores en <http://www.sunsonline.org>



Martin Khor*

Cuando los inversionistas extranjeros demanden

cación de bienes y activos del Estado demandado. Esta capacidad para hacer cumplir los fallos hace de este sistema de solución de diferencias un instrumento muy poderoso.

El referido sistema de solución de diferencias está relacionado con partes pertinentes del capítulo de inversiones del TPP. Una de las disposiciones es una definición amplia de "inversión" que incluye créditos, contratos, derechos de propiedad intelectual y expectativas de ganancias y beneficios futuros. Los inversionistas pueden reclamar por pérdidas de esos activos.

Por la cláusula sobre trato nacional, los inversionistas extranjeros pueden reclamar que son objeto de discriminación si una parte local recibe preferencia u otras ventajas. En virtud de la de trato justo y equitativo, se han entablado demandas por la no renovación o modificación de las condiciones de licencia o de contrato, y por cambios en las políticas o regulaciones, que según el inversionista reducirán sus futuros beneficios.

Por último, los inversionistas pueden entablar demandas alegando "expropiación indirecta". Algunos tribunales han fallado a favor de ellos, que se han cobrado las pérdidas ocasionadas por políticas o regulaciones gubernamentales, como las sanitarias y ambientales estrictas.

El sistema de arbitraje ha recibido duras críticas, entre ellas que las decisiones de los tribunales son arbitrarias y pueden contradecir las decisiones de otros tribunales en casos similares.

Unos pocos abogados monopolizan el negocio del arbitraje internacional de inversiones y las situaciones de conflicto de intereses son frecuentes. En un caso pueden actuar como abogados y en otro como árbitros. Además, en muchos casos existe una predisposición a favor de los inversionistas y se adoptan decisiones claramente injustas para los gobiernos demandados. Pero no hay posibilidad de apelación.

Otro problema son los elevados montos dispuestos por los fallos y las exigencias de aplicación, que incluyen la confiscación de activos. En los últimos años, los reclamos han alcanzado miles de millones de dólares. Y si bien los fallos en general establecen montos menores, los más recientes han sido muy altos.

Entre los casos más recientes figura el fallo del CIADI a favor de la petrolera estadounidense OXY contra Ecuador por 2,300 millones de dólares, la demanda de una empresa minera europea contra Sudáfrica alegando pérdidas por un programa gubernamental de empoderamiento ciudadano y el reclamo de una pe-

trolera británica contra Indonesia por 2,000 millones de dólares luego de que su contrato fuera cancelado por contravenir la legislación nacional.

También Australia enfrenta una demandada de miles de millones de dólares de la tabacalera Philip Morris y la empresa estadounidense Renco /Doe Run demandó al Perú por 800 millones de dólares debido a que no se prorrogó el contrato porque sus actividades habían causado daños al ambiente y la salud. [Ver recuadro.]

El sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estado tiene varias repercusiones. La falta de conformidad con las normas del TPP podría acarrear penas muy duras, ya que un país puede ser demandado ante un tribunal internacional y, por tanto, su gobierno se verá limitado en la formulación de políticas futuras o en la aplicación de las ya existentes.

Es difícil para un gobierno formular nuevas políticas debido a que no puede predecir si las que quiera introducir o modificar están permitidas, ya que el punto de vista de un tribunal puede variar con respecto al de otro, con lo que la soberanía jurídica del país se verá afectada.

Los inversionistas extranjeros elegirán presentar sus casos en el tribunal internacional en el que tengan mayores posibilidades de éxito y cuyos fallos fijen montos más altos que los tribunales locales. El país será más vulnerable ante estos procesos judiciales multimillonarios.

Las negociaciones del TPP aún están en curso y, por tanto, el componente del sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estado todavía se puede negociar. Sin embargo, todo indica que habrá poco espacio para la negociación de los aspectos clave, ya que parece improbable que Estados Unidos se aparte de los puntos principales de sus acuerdos de libre comercio.

Si el sistema de solución de diferencias acarrea demasiados problemas, una opción consiste en solicitar una excepción, es decir, que no se aplique en el país, como ha hecho Australia. Aunque es dudoso que otros países del TPP lo concedan.



Cambio climático: el año 2020 será demasiado tarde

Gerardo Honty*

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó un reporte especial sobre el futuro del clima y las negociaciones internacionales con un llamado de atención urgido a los gobiernos: el año 2020 será demasiado tarde para tomar decisiones. A su juicio, algunas medidas deben ser adoptadas antes de esa fecha si se quiere "mantener vivo el objetivo de dos grados centígrados" y el sector energía debe reducir sus emisiones a partir de ahora a una tasa de cinco por ciento anual.

La última ronda de negociaciones de la Convención de Cambio Climático (Doha, diciembre de 2012) estableció una nueva hoja de ruta (Doha Climate Gateway) con el año 2015 como fecha límite para alcanzar una serie de acuerdos que entrarán en vigor en el año 2020. Pero lo que viene a alertar este informe es que esa es una fecha demasiado retrasada para asegurar el mantenimiento de la estabilidad climática en virtud de las emisiones que se habrán acumulado hasta entonces.

El sector energía es responsable por el ochenta por ciento de las emisiones globales y se espera que para el año 2020 estas alcancen un nivel de cuatro gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO_{2e}) por encima de la trayectoria consistente con el objetivo de los dos grados centígrados. Para lograr esta meta es necesario que las emisiones alcancen su "pico" en 2020 y luego comiencen a declinar vigorosamente. Con las emisiones creciendo constantemente y un acuerdo que recién comience a implementarse en esa fecha, esto resultará imposible.

* Analista en energía y cambio climático del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES). Ver artículo completo en <http://alainet.org/>

La capacidad para hacer cumplir los fallos mediante la confiscación de bienes del Estado demandado hace de este sistema de solución de diferencias un instrumento muy poderoso.

Doe Run versus Perú

Renco/Doe Run anunció en 2011 que demandaba al Perú una indemnización de 800 millones de dólares. La pregunta que muchos se hacen es cómo una empresa que incumple todas sus obligaciones en el país que la acoge puede llevarlo a un proceso de arbitraje internacional y tener posibilidades de ganar una indemnización millonaria. Varios aspectos sobre inversiones en los TLC firmados por el Perú resultan preocupantes. Uno, las medidas de supuesta "expropiación indirecta", cláusula omnipresente en los TLC que Renco/Doe Run esgrime en su demanda. Otro, los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado mediante tribunales arbitrales internacionales. "A partir del caso analizado, abordamos el debate actual sobre



la necesidad de repensar los modelos de protección de las inversiones, buscando generar alternativas que permitan encontrar nuevos puntos de equilibrio entre las variables económicas, sociales, culturales y ambientales", señalan José de Echave y Emma Gómez, en *Doe Run vs. Perú: lecciones de una demanda injusta*. [RedGE, Cuaderno Globalización con Equidad N° 6, Lima, 2013.]